

## 5.6. Violencia, apartheid, desposesión: el precio de ignorar la ocupación de Palestina

La intensificación de la violencia directa en 2021 en el marco del conflicto palestino-israelí y de la ocupación israelí de Palestina volvió a dirigir temporalmente la atención a una disputa histórica y emblemática, pero crecientemente relegada entre las prioridades de los asuntos internacionales. Ello, a pesar de las declaraciones formales de múltiples actores y de la supuesta implicación internacional de largo aliento en la búsqueda de una solución de dos Estados. La conmemoración en 2021 de los 30 años del conocido como proceso Madrid-Oslo convirtió la efeméride en una oportunidad para reflexionar críticamente sobre las dinámicas puestas en marcha desde entonces y que, en la práctica, han favorecido la ocupación israelí de Palestina y la aplicación de políticas que han consolidado la fragmentación, opresión y desposesión del pueblo palestino. El análisis sobre las consecuencias perjudiciales del proceso de paz por los términos en que fue aplicado, de las graves vulneraciones y discriminaciones que padece la población palestina y de la actual coyuntura del conflicto permiten constatar el coste de continuar ignorando la cuestión palestina y la urgencia de nuevas aproximaciones que favorezcan el fin de la impunidad israelí y un abordaje del conflicto desde una perspectiva comprometida con el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos.

En los últimos años las voces abiertamente críticas con el proceso de Madrid-Oslo se han hecho más visibles y recurrentes, poniendo en entredicho sus mecanismos y que se continúe insistiendo en la fórmula de dos Estados sin hacerse cargo de la realidad sobre el terreno. En 2021, el informe del enviado especial de la ONU para la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados abordó extensamente la responsabilidad de los actores internacionales en la perpetuación de un marco que se ha demostrado fallido.<sup>12</sup> En el documento, Michael Lynk subraya que uno de los principales problemas del proceso Madrid-Oslo es que permitió a Israel imponer su exigencia de que las negociaciones con los representantes palestinos se desarrollaran al margen de marco de derecho internacional aplicable, incluyendo el derecho internacional humanitario y las propias resoluciones de Naciones Unidas. Este marco normativo no ha sido el referente del proceso y, de esta manera, se ha erosionado la posibilidad real de una solución de dos

Estados, ya que en la práctica se ha ido consagrando la realidad de un solo Estado con derechos desiguales. Las políticas israelíes de anexión progresiva de facto de los territorios palestinos han “esfumado” las posibilidades de una solución de dos Estados, subrayaba en 2021 el ex secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon, destacando además que el conflicto no puede ser considerado como una disputa entre iguales que pueda ser abordada a través de negociaciones bilaterales.<sup>13</sup>

La asimetría de poder entre las partes, de hecho, se ha visto acentuada en este proceso, ya que el esquema negociador ha beneficiado a la potencia ocupante. En el marco de los Acuerdos de Oslo, Israel vio reconocido su derecho a existir por la OLP sin un reconocimiento equivalente al derecho de autodeterminación y la creación de un Estado palestino; se externalizaron sus responsabilidades como potencia ocupante a través de la Autoridad Palestina y se ha visto beneficiado por las contribuciones de los donantes internacionales.<sup>14</sup> Los acuerdos de Oslo fragmentaron aún más los territorios palestinos y la falta de un cronograma claro más allá de los cinco años del período interino inicial favorecieron que Israel convirtiera las negociaciones en un proceso permanente, mientras continúa con sus políticas de expansión de asentamientos.<sup>15</sup> Adicionalmente, el principal mediador del proceso, EEUU, ha mantenido su postura de apoyo incondicional a Israel que ha favorecido la ocupación y la falta de rendición de cuentas. La UE no ha utilizado su potencial político y económico para presionar a Israel, ha evitado la confrontación y no se ha desmarcado de las políticas delineadas por EEUU y mantiene una adhesión irrestricta al proceso de Madrid-Oslo, pese a las críticas.<sup>16</sup> Entre los gobiernos del mundo árabe tampoco existe un compromiso firme con la causa palestina, como ha quedado incluso más en evidencia tras los recientes acuerdos bilaterales con Israel.

Las voces críticas con el proceso Madrid-Oslo han subrayado que la sistemática adhesión de los principales actores internacionales a la fórmula de dos Estados ignorando la realidad que existe en el terreno y sin demostrar una voluntad política efectiva de resolver el conflicto ha derivado en una “pantomima diplomática”<sup>17</sup> y en una “ficción de proceso de paz”.<sup>18</sup> International Crisis Group destacaba a finales de 2021 que el discurso de los representantes diplomáticos sobre una

12. UN, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967*, A/76/433, 22 de octubre de 2021.

13. Ban Ki-moon, “US should back a new approach to the Israeli-Palestinian conflict”, *The Financial Times*, 29 de junio de 2021.

14. José Abu Tarbush, *Tres décadas de la Conferencia de paz de Madrid: un marco negociador deficitario*, Memorando no.251/2021, OPEX, Fundación Alternativas, 3 de noviembre de 2021.

15. Inés Abdel Razeq, “Thirty Years On: The Ruse of the Middle East Peace Process”, *al-Shabaka*, 31 de octubre de 2021.

16. UN (2021) y Hugh Lovatt, “The end of Oslo: A new European strategy on Israel-Palestine”, *European Council on Foreign Relations*, Policy Brief, 9 de diciembre de 2020.

17. UN, *Report of the Special Rapporteur...* (2021), op.cit.

18. José Abu Tarbush (2021), op.cit.

solución bilateral que es prácticamente inalcanzable en la práctica encubre a Israel para que persista en sus políticas de anexión.<sup>19</sup> Muchas voces palestinas se han mostrado escépticas con el proceso desde un principio y vienen denunciando con contundencia que Israel utiliza el proceso de paz para eludir la rendición de cuentas y profundizar en su dominación sobre la población palestina, como subrayaban recientemente las analistas Inés Abdel Razek y Yara Hawari.<sup>20</sup> Los supuestos intentos por “reactivar” el proceso de paz se han vuelto irrelevantes, sobre todo en un escenario en el que los sucesivos gobiernos israelíes solo mantienen una adhesión formal a las negociaciones.<sup>21</sup> Como destacaba José Abu Tarbush, Israel parece dispuesto a una política de gestión del conflicto de manera indefinida.<sup>22</sup> Paralelamente, la mayor parte de la población palestina ha perdido la esperanza de obtener un Estado a través de un proceso de negociaciones. Mientras, la AP –afectada por una creciente falta de legitimidad, descrédito por corrupción, acusaciones de colaboracionismo y el pulso con Hamas– mantiene una estrategia de internacionalización con la que busca compensar la asimetría de poder, con resultados muy limitados. Pese a las recurrentes amenazas de la dirigencia palestina de desvincularse de los acuerdos de Oslo, estos siguen siendo el marco vigente. En este escenario, no contribuye que Fatah y Hamas parecen haberse instalado en la división, que en la práctica favorece el statu quo y el reparto de poder entre ambas formaciones y atenta contra el relevo generacional y la renovación de liderazgos palestinos.<sup>23</sup>

En este contexto, crecientes voces vienen exigiendo que se reconozca el fracaso de esta aproximación de la comunidad internacional para abordar la cuestión palestino-israelí en las últimas décadas y subrayando la urgencia de un nuevo enfoque. Esta nueva aproximación resulta más perentoria e ineludible teniendo en cuenta las reiteradas denuncias sobre la realidad de apartheid que vive la población palestina. Numerosas voces palestinas, activistas y organizaciones de la sociedad civil, además de personas expertas de Naciones Unidas,<sup>24</sup> vienen denunciando esta situación desde hace años. Más recientemente esta denuncia ha cobrado más notoriedad y visibilidad mediática, después de que entidades de derechos humanos

israelíes –como B’Tselem– y ONG internacionales de referencia como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional denunciaran abiertamente el apartheid contra la población palestina y señalaran a las autoridades israelíes por sus responsabilidades en este crimen. Así, en un extenso informe publicado en mayo de 2021, HRW enfatizaba que, de manera sistemática, las autoridades israelíes han privilegiado a la población judía y discriminado a la población palestina. La organización apunta que, con el objetivo de mantener el control de la población judía sobre el poder, la política y la demografía, las autoridades israelíes han desposeído, confinado, separado forzosamente y subyugado a palestinos y palestinas en virtud de su identidad. El informe añade que algunas asunciones como que la ocupación es temporal, que el “proceso de paz” pondría fin a los abusos israelíes y que la población palestina tiene control sobre sus vidas en Cisjordania y Gaza o que Israel es una democracia igualitaria han oscurecido la realidad: un régimen de dominio israelí profundamente discriminatorio con palestinos y palestinas.<sup>25</sup> Meses más tarde, y tras cuatro años de investigaciones, Amnistía Internacional publicó otro informe con un diagnóstico similar, en el que enfatiza que la población palestina es tratada como un grupo racial inferior y privada de derechos sistemáticamente.<sup>26</sup>

Más allá del contexto de violencia estructural, la relevancia y urgencia de un nuevo enfoque también ha quedado de manifiesto por la actual coyuntura y los hechos y dinámicas observadas en el último año. En 2021 no solo se vivió una importante escalada de violencia directa –que causó los mayores niveles de letalidad en siete años, la inmensa mayoría víctimas palestinas–, sino que también se alertó sobre el progresivo aumento de la violencia de los colonos israelíes con la complicidad de las autoridades. Adicionalmente, el nuevo Gobierno israelí que asumió en 2021 intensificó la persecución y criminalización de reconocidas organizaciones de la sociedad civil palestina y solo parecía dispuesto a ofrecer una especie de “paz económica” para minimizar el conflicto. El conjunto de factores, por tanto, refuerza la necesidad de una nueva aproximación que se haga cargo de la asimetría de poder entre las partes, con un enfoque basado en derechos y que promueva acciones urgentes para dismantelar la ocupación israelí.

**Voces críticas destacan que la sistemática adhesión de los principales actores internacionales a la fórmula de dos Estados ignorando la realidad en terreno y sin demostrar una voluntad política efectiva de resolver el conflicto han derivado en una “ficción de proceso de paz”**

19. International Crisis Group, “Ten Conflicts to Watch in 2022”, *Foreign Policy*, 29 de diciembre de 2021.

20. Inés Abdel Razek (2021), op. cit y Yara Hawari, “Thirty years of sham ‘peace process’”, *al-Jazeera*, 1 de noviembre de 2021.

21. International Crisis Group, *Beyond Business as Usual in Israel-Palestine*, Middle East Report no.225, ICG - USMEP, 10 de agosto de 2021.

22. José Abu Tarbush (2021), op.cit.

23. Itxaso Dominguez de Olazábal, “Praxis of Palestinian Democracy: The Elections that Never Were and the Events of May 2021”, *IEMed Mediterranean Yearbook*, IEMED, noviembre de 2021.

24. UN Human Rights Office of the High Commissioner, *Israeli annexation of parts of the Palestinian West Bank would break international law – UN experts call on the international community to ensure accountability*, 16 de junio de 2020.

25. Human Rights Watch, *A Threshold Crossed. Israeli Authorities and the Crimes Of Apartheid and Persecution*, HRW, 27 de abril de 2021.

26. Amnistía Internacional, *El apartheid israelí contra la población palestina: un análisis de décadas de opresión y dominación*, 1 de febrero de 2022.